CLUB PRENSA CANARIA

Conferencia inauguración temporada 2005-2006

JORDI SEVILLA

Ministro de Administraciones Públicas

26 de septiembre de 2005

Buenos días.

Agradezco las palabras de Jerónimo, que ha querido venir hoy aquí a presentar mi intervención, no sólo como amigo y compañero de ideales y proyectos, sino también como antecesor mío en el Ministerio de Administraciones Públicas, lo que confiere a su presencia y a sus palabras un especial valor para mí.

Quiero agradecer también al Club Prensa Canaria su amable invitación para inaugurar su temporada de actividades, algo que, según me han informado, corrió el año pasado a cargo de Juan Fernando López Aguilar, lo cual parece indicar que, para este importante Club, soy el ministro más canario después del ministro genuinamente canario, lo que considero un gran honor.

Debo confesarles, por otra parte, que estoy encantado de venir a Canarias, estas islas afortunadas que tanto me han impresionado siempre por su belleza y por la alegría de sus gentes, y a las que encuentro llenas de vitalidad y de dinamismo.

La verdad es que, últimamente, allá donde voy, en España, me encuentro con una sociedad llena de energía y de proyección hacia el futuro, como es propio de un país que, en contra de lo que no cesan de pronosticar los persistentes agoreros, está gozando de una fase histórica de desarrollo sostenido y de avance continuado en todos los aspectos de su vida económica y social.

En estos primeros momentos de mi intervención, quiero hablarles de lo mucho que ya hemos avanzado, en el año y medio que llevamos en el Gobierno, dentro del camino para alcanzar la España que queremos la inmensa mayoría de los españoles.

Durante este año y medio de Gobierno, hemos conseguido recuperar el espíritu de la colaboración y la cooperación en la política territorial española, procurando evitar, en todo momento, la confrontación y la utilización de las instituciones con fines partidistas.

Así, hemos reducido conflictos entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas; hemos creado la Conferencia de Presidentes, que apenas ha celebrado dos reuniones y se ha consolidado ya como un importante foro de diálogo y cooperación entre instituciones; hemos hecho posible que representantes autonómicos formen parte de las delegaciones españolas en los Consejos de Ministros de la Unión Europea; además, el presidente del Gobierno mantiene un diálogo habitual con todos los presidentes autonómicos y se han reanudado las negociaciones para realizar nuevos traspasos y suscribir convenios con las Comunidades Autónomas, que no habían existido en la etapa anterior.

Y no se ha roto ni se ha desguazado nada, y menos que nada España, que es más fuerte de lo que suponen algunos.

Al contrario, España está superando importantes retos con democracia, con diálogo y con reformas para mejorar la arquitectura institucional de nuestro país y para ponernos a la altura de lo que exigen y merecen los ciudadanos en el siglo XXI.

Esos agoreros del Apocalipsis diario, que confunden los Pirineos con los Balcanes, llegan incluso a negar el bienestar y la mejoría económica y social experimentada en este año y medio.

Pero la realidad es contundente: España crece a un ritmo del 3,4 por ciento anual, muy por encima de nuestros vecinos; la confianza de los empresarios españoles y de los inversores extranjeros es alta, como lo demuestra el que los tipos de interés a 10 años para España sean más bajos que para Alemania, una señal de que hay más confianza en el futuro de nuestro país que en el de Alemania; recibimos, además, la visita de más de 40 millones de turistas al año, que vienen a un país tranquilo y moderno, y que repiten muchos años; y estamos creando empleo hasta reducir el paro al nivel más bajo de los últimos 25 años.

Una realidad que se empeñan en ignorar los que hablan de que España “va al desguace”, cuando lo que se está yendo al desguace son algunas formas de entender la acción de gobierno como pura imposición y de practicar la política como el simple intento de destruir lo que no coincide con nuestros planteamientos.

Frente a la irresponsabilidad de algunos, los Presupuestos Generales del Estado para 2006, cuyo proyecto aprobamos en el pasado Consejo de Ministros, van a suponer un nuevo impulso para este país, porque nos permitirán crecer aún más y distribuir mejor, dado que pretendemos aprovechar la buena marcha de la economía para mejorar el presente de las personas y afianzar el futuro del país.

Con estos Presupuestos, el Estado va a invertir más, hasta un 7,6% de incremento anual, y además con rigor presupuestario y unas cuentas saneadas, que nos permitirán mejorar nuestra productividad a través de más recursos para la Educación, para Investigación y Desarrollo y para Infraestructuras.

Son los Presupuestos para una España que es solidaria no sólo entre sus territorios sino también entre las personas, con más de la mitad del gasto, por segundo año consecutivo, dedicado a fines sociales, con un incremento espectacular de las plazas de educación infantil y de las becas, y con una sanidad a la que aportamos, como se vio en la reciente Conferencia de Presidentes, más recursos financieros para que las Comunidades Autónomas puedan afrontar el déficit derivado del sistema anterior y puedan mejorar las prestaciones a los ciudadanos.

Con estos presupuestos, este país solidario que es España le va a prestar aún más atención a las personas más necesitadas, como ocurre con la subida de las pensiones más bajas en un porcentaje del doble respecto a la media, o con el incremento del 12% para Seguridad Ciudadana y para Justicia, o con las ayudas para la integración de los inmigrantes, cuyas partidas van a ver multiplicado su importe por 18 .

Y para reforzar el papel cada vez más activo y más importante de España en la escena internacional, como un país que impulsa la paz y la solidaridad entre las naciones del mundo, se va a incrementar la ayuda al desarrollo en más de un 37%, hasta alcanzar un 0,35% del PIB, aunque nuestro compromiso es seguir avanzando, año a año, hasta alcanzar cuanto antes el deseado objetivo del 0,7%.

En suma, éstos son unos Presupuestos que aumentan la inversión del Estado en todo aquello que contribuye a que tengamos una país más productivo, con mayor competitividad y bienestar social, de manera que se genere más riqueza y, en definitiva, más empleo para todos.

Con estos Presupuestos, y también con medidas legislativas, estamos consiguiendo que en este país se registren considerables avances en los derechos ciudadanos, para que sea un país donde ya no se discrimina a nadie a la hora de casarse, donde se está logrando que se haga efectiva la igualdad de sexos en todos los ámbitos de la vida y que cualquier persona, independientemente de su origen, tenga las mismas posibilidades de desarrollar el proyecto de vida que elija.

Éste es un país, además, donde se procura que el desarrollo sea general y que no se discrimine a ningún territorio en las inversiones del Estado, gobierne quien gobierne en ese territorio, y nuestra acción de gobierno lo demuestra.

Aquí, en la Comunidad Canaria, el Gobierno ha continuado y reforzado importantes inversiones en infraestructuras básicas para el desarrollo, que, por poner algunos ejemplos, se concretan prioritariamente en convenios en materia de vivienda, de carreteras o de obras hidráulicas de interés general en todas las islas, obras tan importantes como estaciones desaladoras, depuradoras o embalses y conducciones.

Por otra parte, la recuperación del diálogo institucional entre el Gobierno Central y las Autonomías ha permitido avanzar en asuntos de gran relevancia para las Comunidades, como ha ocurrido aquí en Canarias respecto al tema de las relaciones con la Unión Europea.

Tras varias reuniones bilaterales, se estableció que en la Representación Española ante la Unión Europea se destinase un funcionario en exclusiva a los asuntos canarios, en permanente coordinación con el gobierno autonómico, lo que vino a reconocer la extremada importancia que, dada su insularidad y su condición de región ultraperiférica, tienen las relaciones de esta Comunidad Autónoma con la Unión.

Otro fruto del diálogo entre el Gobierno Central y la Comunidad Canaria ha sido la firma del convenio para poner en marcha el llamado Plan conjunto de Inmigración para Canarias, que supone la dotación de 188 millones de euros, 127 de los cuales son aportados por la administración central, para conseguir más medios de salvamento marino y de atención a los inmigrantes, para luchar contra la inmigración ilegal, para mejorar la integración y para fomentar la cooperación con los países de origen y con la Unión Europea.

Este es un país, por tanto, que avanza y que lo está haciendo más coordinadamente, procurando la participación de todos y procurando también que el progreso alcanzado llegue a todos, con un impulso sostenido y consciente del equilibrio territorial.

Ahora bien, podemos sentirnos razonablemente satisfechos de España, pero eso no significa que pensemos que todo es tan perfecto, tan perfecto, que no se puede mejorar, que mejor no toquemos nada.

Todo, naturalmente, se puede mejorar, y éste es un Gobierno con una clara vocación reformista, que quiere seguir impulsando la política territorial en España, porque pensamos que se puede mejorar el encaje de los diversos territorios para conseguir una España no sólo más unida, sino sobre todo mejor unida.

Así, mientras hay políticos que profetizan cada día la ruptura de España, la semana pasada pudimos asistir al debate para la admisión a trámite de la primera reforma de un Estatuto de Autonomía, el de la Comunidad Valenciana, que llega al Congreso de los Diputados con el consenso del PSOE y del PP.

Ésta una buena muestra de una reforma estatutaria que el Gobierno estima como adecuada: una reforma que amplía el autogobierno, que respeta la Constitución, que llega con un amplio acuerdo de las fuerzas políticas, y que da respuesta a las demandas de los ciudadanos para que se mejoren los servicios públicos.

Y no se rompe nada, ni se desguaza nada.

Al contrario, la presentación de esta propuesta de reforma del estatuto valenciano ha venido a demostrar el éxito de la agenda territorial del Gobierno y ha reforzado, por tanto, la oportunidad de la decisión que tomó el Gobierno de no oponernos a las reformas estatutarias, siempre que respeten las normas de estar dentro de la Constitución y de contar con un amplio consenso.

Con esta primera reforma ha quedado claro que es posible mejorar la situación, el acomodo, el estar en España de algunas Comunidades Autónomas sin que se rompa ni se desguace nada, y tenemos plena confianza en que otros procesos de reforma que están en marcha, como el del estatuto de Cataluña, van a culminar igual de bien y van a ser buenos para las Comunidades Autónomas y buenos para España.

Ahora bien, que la reforma del estatuto valenciano haya sido un éxito no significa que tengamos que fotocopiarlo y aplicarlo a todas las otras reformas, porque cada Comunidad Autónoma tiene unas necesidades y unos requerimientos de autogobierno, que se deben respetar siempre que se atengan a las normas citadas.

Existe, sin duda, lo que se llama los “hechos diferenciales”, que distinguen unas realidades específicas de otras, y entre los cuales yo siempre he considerado como el más claro al que afecta a Canarias, y que consiste en su insularidad, dispersa en un amplio archipiélago, y en su condición de región ultraperiférica de Europa.

Estas características explican determinados rasgos diferenciales en las relaciones entre la Administración Central y la Autonómica, como el tratamiento específico en la representación ante la Unión Europea o las aportaciones financieras para compensar la insularidad, tanto en la Sanidad como en el transporte, diferencias que están plenamente justificados por la necesidad de atender algunos problemas estructurales propios de este territorio.

Lo que sí resultará común a todas las reformas estatutarias es que, tal y como ha ocurrido con el estatuto valenciano, uno de sus frutos sustanciales sea la elevación del techo competencial de las Comunidades Autónomas, con el fin de que éstas presten más y mejores servicios a los ciudadanos, y que tengan una mayor capacidad financiera de hacerlo.

Pero esta elevación competencial debe mantenerse siempre dentro del marco que establece la Constitución, porque las reformas estatutarias no pueden ser el instrumento a través del cual se reforme la Constitución, ni es a través de las reformas estatutarias que trae a las Cortes Generales un Parlamento Autonómico como se reforma la Constitución.

Hay otros mecanismos, hay otros procedimientos para la reforma de la Constitución y, por tanto, las reformas estatutarias deben plantearse siempre dentro del marco constitucional.

De hecho, dentro de nuestro programa de mejoras del sistema, el Gobierno ha optado por impulsar en las Cortes Españolas una reforma, concreta y limitada, de la Constitución, porque entendemos que ha habido una evolución de la sociedad española y se han producido algunos cambios que no pudieron ser previstos en la redacción de 1978.

Es preciso recordar, porque a veces esto se olvida, que tanto en el programa electoral del Partido Socialista como en el discurso de investidura del Presidente Zapatero se exponían ya con toda claridad los cuatro puntos sobre los cuales queremos que haya una reforma de la Constitución.

Dos de estos puntos se refieren a la sucesión a la Corona y a la mención de la Unión Europea; los otros dos tienen implicaciones para el debate territorial en España.

Estos dos aspectos son la reforma del Senado, de la que les hablaré más adelante, y la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas en la Constitución, para cerrar de alguna forma el proceso abierto con el título VIII, porque, cuando se redactó, no se sabía ni cuántas Comunidades Autónomas iba a haber ni cuáles iban a ser estas Comunidades Autónomas.

En estos momentos, tenemos ya un mapa de distribución territorial consolidado y una presencia muy asentada de las Comunidades Autónomas, y, por tanto, la introducción de la denominación de las Comunidades Autónomas existentes puede ser considerada como un cierre del mapa autonómico que abre la Constitución.

Tenemos, en suma, una perspectiva de reformas que consiste en que, por una parte, se mejore el autogobierno respetando la Constitución y que, por otra parte, se proceda a los cambios en la Constitución que les he citado, para lo que dispondremos, en pocos meses, de un dictamen del Consejo de Estado al respecto.

La reforma de los Estatutos, sin embargo, no puede ser considerada como la única solución a todos los problemas de las autonomías, porque hay muchos asuntos que deben encontrar su acomodo en otros lugares, en otros contextos, que son imprescindibles para el buen funcionamiento de un Estado compuesto y complejo como el nuestro.

La Nueva Agenda Territorial del Gobierno no se agota en las reformas de los Estatutos de Autonomía, porque consideramos que, para mejorar el encaje territorial en España, es necesario que avancemos también en las políticas de cooperación territorial, de las que les hablaré a continuación.

Dentro de lo que se ha denominado “la cuestión territorial española”, es preciso que valoremos de manera especialmente positiva lo que representó la Constitución de 1978 y la construcción constitucional desde entonces hasta ahora.

En los últimos 25 años, el desarrollo del Estado autonómico ha supuesto un intensísimo proceso de descentralización administrativa y política, que ha permitido aproximar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos y mejorar el nivel de eficacia de las Administraciones Públicas.

Los Estatutos de Autonomía se han desarrollado con éxito y en su casi totalidad, hasta cubrir un amplio repertorio de demandas sociales y consolidar la percepción de las instituciones autonómicas, por parte de los ciudadanos, como instrumentos útiles de Gobierno.

No obstante, es verdad que ha existido una tensión sustancial, en forma de cierto espíritu de confrontación, en todo el proceso de construcción autonómica.

La aparición y consolidación, durante estos 25 años, de un sujeto político nuevo como son las Comunidades Autónomas han supuesto que éstas hayan tenido que abrirse paso estableciendo y fijando sus competencias, su marco de actuación entre la Administración Central y los municipios, y a veces lo han tenido que hacer a codazos, han tenido que hacerlo con una dialéctica en la que lo importante era definir qué es lo de uno y qué es lo de otro, una dialéctica que implicaba la confrontación para definir el espacio de actuación de cada uno.

Si echamos una mirada general a todo el período, podríamos decir que el sesenta por cien del tiempo político ha estado empleado en la clarificación competencial, en el conflicto por la competencia, y sólo el cuarenta por cien en buscar fórmulas de cooperación.

Pero, cuando el Partido Socialista gana las últimas elecciones generales, nos encontramos una situación marcada por un predominio casi absoluto del espíritu de confrontación, con los mecanismos de cooperación prácticamente paralizados y con un Gobierno que no ofrecía ninguna opción para mejorar el sistema, sino sólo una permanente voluntad de que nada se moviese.

El actual Gobierno cree en la cooperación y cree en la necesidad de un mejor acomodo de las nacionalidades y regiones de España en el sistema de autonomías, y por ello hemos ofrecido la posibilidad de avanzar en un proceso paralelo: por una parte, reforma de los Estatutos, con las condiciones que les he mencionado antes, lo que supondrá, sin duda, mejorar su autogobierno; y, por otra, creación o desarrollo de mecanismos de cooperación, lo que implica mejorar la coordinación y la participación de las Comunidades Autónomas en la gobernanza de la Nación, con esa figura que hemos llamado “la cogobernanza”.

El Gobierno cree que, a partir de la situación actual, y a pesar o precisamente por los procesos de reforma estatutaria, aunque se van a seguir planteando debates sobre las competencias, el tema competencial, el debate competencial, debería ocupar sólo el cuarenta por cien del debate territorial, mientras que el sesenta por cien debería estar centrado en la cooperación y en los mecanismos de cooperación.

Es decir, se tendrían que invertir los porcentajes de los dos aspectos que han centrado hasta ahora, globalmente, el debate territorial en España.

Porque, una vez que ya tenemos, en su mayor parte, consolidado y considerado lo que es de uno y lo que es de otro, es el momento de ver cómo podemos trabajar juntos, es el momento de dejar de mirarnos de reojo y de mirar las dos Administraciones, la autonómica y la central, hacia delante.

Por lo tanto, el debate fundamental de éste y de los próximos momentos, en nuestra política territorial, debería ser el de cómo establecemos más y mejores mecanismos de colaboración entre las Administraciones.

Es aquí donde se encuadra el nuevo impulso a la cooperación que ha logrado el Gobierno en este año y medio, con la creación de la Conferencia de Presidentes, con el acuerdo para la participación de las Autonomías en la Unión Europea o con la recuperación del diálogo institucional, tanto multilateral como bilateral, un impulso que hay que mantener y reforzar.

Y es aquí donde debe encuadrarse la reforma constitucional del Senado, para convertirlo en uno de los principales espacios de encuentro entre las Comunidades Autónomas, y entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la Nación.

Es por eso que cada vez va a ser más necesaria su reforma, porque cada vez va a ser más necesario que dispongamos de una sede para el diálogo institucional, un ámbito estable donde se puedan pactar las diferencias, pactar las confrontaciones, y debatir sobre todo aquello en lo que se está o no se está de acuerdo, a través de los procedimientos legalmente establecidos.

Por otra parte, esta apuesta por la cooperación nos ha llevado a realizar una oferta y una propuesta para que se la tenga en cuenta, como forma de lealtad institucional, en todas las reformas que se están llevando a cabo, lo que supone un compromiso firme de que no se va a seguir la vía de la imposición en las relaciones entre las distintas Administraciones.

Dentro de este espíritu de cooperación y de respeto a la autonomía de cada Administración, nos proponemos avanzar también en el desarrollo del gobierno local, que es otra tarea pendiente, y sin duda de gran importancia, de nuestra democracia, porque los ayuntamientos son las instituciones más próximas a los ciudadanos y cuya gestión incide de forma más directa en la vida cotidiana.

Tras la elaboración de un Libro Blanco, estamos desarrollando ya la nueva Ley del Gobierno y la Administración Local, para dotar a los entes locales en España de más competencias y más medios, con el reconocimiento de su autonomía política, por una parte, y con el impulso a nuevas formas de cooperación institucional, por otra.

En realidad, cada vez hay más espacios de actuación política en los que ninguna de las Administraciones, por sí sola, va a poder resolver los problemas de los ciudadanos.

Por ello, la esencia de nuestro diseño institucional es una España con las tres Administraciones, la Central, la Autonómica y la Local, cooperando para resolver los problemas de aquél a quien todas se deben, que es un único y mismo ciudadano.

Queda claro, pues, que el fin último de las reformas que proponemos no es otro que lograr una Administración Pública que funcione mejor y que preste sus servicios de forma equitativa a todos los ciudadanos, de forma que los derechos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico puedan ser ejercidos por todos, con independencia de su origen, el lugar donde viven o su condición social.

Y pensamos que el avance del autogobierno de las autonomías, junto a las mejoras en la cooperación territorial y el desarrollo de la Administración Local, son medidas que van a contribuir decisivamente a que las Administraciones Públicas españolas presten sus servicios con más eficacia, de una forma más próxima y con mayor participación de los ciudadanos en la definición de las políticas.

Ahora bien, para responder a las demandas ciudadanas, el Gobierno considera esencial que existan garantías de cohesión territorial, porque no existe, ni puede existir, cohesión social sin cohesión territorial.

Dentro de la denominada cuestión territorial, no podemos confundir el debate sobre la diferencia con el debate sobre la igualdad, porque el reconocimiento de la diferencia no puede suponer nunca el establecimiento de desigualdades o de privilegios dentro de la sociedad española, tal y como reconoce la Constitución.

Se debe asegurar, por tanto, que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos básicos, por lo que es necesario que exista una cohesión territorial, de forma que nadie pueda sentirse discriminado frente a ciudadanos de otra parte de España.

Por ello, en paralelo a los avances en el autogobierno, es necesario que las Comunidades Autónomas acepten y respeten lo que la Constitución encarga al Gobierno de la Nación, que es llevar adelante determinadas tareas, como garantizar la igualdad de los ciudadanos mediante, entre otras cosas, la solidaridad territorial.

El otro fruto del actual proceso de reformas debe ser, por tanto, el reconocimiento definitivo de que esas tareas son responsabilidad y competencia del Gobierno Central y de las Cortes, que es donde reside la soberanía nacional, y de que, para llevar adelante esa competencia, el Gobierno Central necesita también sus recursos, sus estructuras, sus Ministerios, sus funcionarios y su autonomía.

En suma, ante la recurrente pregunta que algunos hacen a este Gobierno, respecto a qué España queremos, la respuesta es clara e inequívoca: la España que queremos es la España democrática, plural, constitucional y autonómica que conocemos, pero dotada de más mecanismos de cooperación institucional para posibilitar un mejor funcionamiento de la Administración.

Una España que, tras las reformas modernizadoras en las que estamos inmersos, se podrá presentar como mejor unida, más respetuosa con las identidades de sus nacionalidades y regiones, y también con las necesidades de los ciudadanos, más eficaz en la gestión de lo público y más solidaria.

Y no podemos tener dudas de que lo conseguiremos.

La generación anterior fue capaz de alumbrar el marco de convivencia decisivo que ha sido nuestra Constitución.

Ahora, nuestro reto es el de hacer, en este marco de convivencia, una España mejor unida, una España más eficaz, una España en la que todos los ciudadanos se sientan cómodos de participar en un proyecto común.

En ello estamos, en ello está el Gobierno, a ello les invitamos.

Muchas gracias.